

APLICABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO A LOS  
MIGRANTES IRREGULARES VENEZOLANOS EN EL MUNICIPIO DE SAN  
JOSÉ DE CÚCUTA (COLOMBIA) EN LOS AÑOS 2016-2017.



JHON ALVARO GALAVIS RODRÍGUEZ  
MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ RAMÍREZ  
MARÍA CAMILA RAMÍREZ CARRASCAL

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA  
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES  
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO  
CÚCUTA, COLOMBIA

2018

APLICABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO A LOS  
MIGRANTES IRREGULARES VENEZOLANOS EN EL MUNICIPIO DE SAN  
JOSÉ DE CÚCUTA (COLOMBIA) EN LOS AÑOS 2016-2017.

JHON ALVARO GALAVIS RODRÍGUEZ  
MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ RAMÍREZ  
MARÍA CAMILA RAMÍREZ CARRASCAL

Trabajo presentado como requisito parcial para optar al título de Especialista en Derecho  
Administrativo.

Asesor disciplinar  
YEFRI YOEL TORRADO VERGEL

Asesor metodológico  
DARWIN CLAVIJO CÁCERES

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA  
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES  
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO  
CÚCUTA, COLOMBIA

2018

## RESUMEN

La investigación para determinar la aplicabilidad que se dio al procedimiento sancionatorio en el caso de los migrantes irregulares venezolanos en el Municipio de San José de Cúcuta (Colombia) en los años 2016-2017, presenta un examen de las sanciones o medidas administrativas que se encuentran contempladas en la normativa colombiana para ser aplicadas a los migrantes irregulares; así como las sanciones o medidas administrativas que ha aplicado Migración Colombia en el Municipio de San José de Cúcuta con respecto a los migrantes irregulares en los años 2016-2017; y, finalmente, las dificultades que ha tenido la autoridad migratoria en el Municipio de San José de Cúcuta para aplicar las sanciones o medidas administrativas en el caso de los migrantes irregulares en los años 2016-2017. Se trata de una investigación de naturaleza jurídica, de tipo documental, y con enfoque cualitativo.

### Palabras clave:

Migrantes irregulares, procedimiento sancionatorio, medidas administrativas, sanciones, Migración Colombia.

## ABSTRACT

The investigation to determine the applicability that was given to the sanctioning procedure in the case of Venezuelan irregular migrants in the Municipality of San José de Cúcuta (Colombia) in the years 2016-2017, presents an examination of the sanctions or administrative measures that are found contemplated in the Colombian regulations to be applied to irregular migrants; as well as the sanctions or administrative measures that Migración Colombia has applied in the Municipality of San José de Cúcuta with respect to irregular migrants in the years 2016-2017; and, finally, the difficulties that the migration authority has had in the Municipality of San José de Cúcuta to apply sanctions or administrative measures in the case of irregular migrants in the years 2016-2017. It is an investigation of a juridical nature, of a documentary type, and with a qualitative approach.

### Keywords:

Irregular migrants, sanction procedure, administrative measures, sanctions, Migration Colombia.

## INTRODUCCIÓN

La crisis social, política y económica que se vive en Venezuela y que se ha agudizado en los últimos años, ha generado una migración masiva de ciudadanos venezolanos hacia Colombia, los cuales han ingresado principalmente por los puentes internacionales fronterizos de los municipios Pedro María Ureña – San José de Cúcuta o San Antonio del Táchira – Villa del Rosario, y quienes se han asentado en la ciudad de Cúcuta, en busca de una mejor calidad de vida.

El principal problema que se registra en la ciudad de San José de Cúcuta, frente a la migración de venezolanos a Colombia, es que no todos lo hacen de manera regular, sino que muchos de ellos han ingresado a territorio colombiano en forma irregular, por lo que Migración Colombia, ha tenido que dar aplicabilidad a los procedimientos sancionatorios y medidas administrativas establecidos en la legislación colombiana y que contemplan medida de deportación, medida de expulsión y sanciones económicas.

El estudio para determinar la aplicabilidad que se dio al procedimiento sancionatorio en el caso de los migrantes irregulares venezolanos en el Municipio de San José de Cúcuta (Colombia) en los años 2016-2017, es de naturaleza jurídica, de tipo documental, y con enfoque cualitativo. Es jurídico porque está enfocado en el análisis de la normativa que regula las sanciones o medidas administrativas en el caso de los migrantes irregulares en Colombia; asimismo, es documental porque su estudio se centró en las leyes, así como otros trabajos, estudios, artículos científicos y académicos, entrevistas e informes. Su enfoque es cualitativo, porque buscó a partir del análisis describir las diferentes cualidades del objeto en estudio, que es para este caso es el procedimiento sancionatorio en el caso de los migrantes irregulares en Colombia.

La investigación se compone de tres capítulos, en el primero de ellos se examinan las sanciones o medidas administrativas que se encuentran contempladas en la normativa colombiana para ser aplicadas a los migrantes irregulares; en el segundo, se identifican las sanciones o medidas administrativas que ha aplicado Migración Colombia en el Municipio

de San José de Cúcuta con respecto a los migrantes irregulares en los años 2016-2017; y en el tercero, se establecen las dificultades que ha tenido la autoridad migratoria en el Municipio de San José de Cúcuta para aplicar las sanciones o medidas administrativas en el caso de los migrantes irregulares en los años 2016-2017.

APLICABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO A LOS  
MIGRANTES IRREGULARES VENEZOLANOS EN EL MUNICIPIO DE SAN  
JOSÉ DE CÚCUTA (COLOMBIA) EN LOS AÑOS 2016-2017.

La migración irregular<sup>1</sup> de venezolanos al territorio colombiano, es lo que ha conllevado a que Migración Colombia, tenga que aplicar los procedimientos administrativos sancionatorios, los cuales siempre han sido dirimidos por el ejecutivo a diferencia de otros países donde existe una jurisdicción migratoria, convirtiendo estos procedimientos sancionatorios en procesos judiciales bastante extensos. De igual forma, las conductas constitutivas de faltas a la normatividad migratoria han sido tipificadas a través de decretos, los cuales describen y establecen sus sanciones administrativas. En otrora la entidad que tramitaba estos procedimientos era el Departamento Administrativo de Seguridad DAS al amparo del decreto 001 de 1994 o Código Contencioso Administrativo; hoy en día, con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, y a raíz de la liquidación del DAS, Migración Colombia realiza dichos procedimientos.

Sin embargo, a pesar de que Migración Colombia ha dado aplicabilidad a los procedimientos sancionatorios establecidos en la legislación colombiana como son una sanción administrativa (multa) o la imposición de una medida administrativa de deportación o expulsión, lo cierto es que la ciudad de Cúcuta está invadida de ciudadanos venezolanos que se encuentran en este territorio de forma irregular, es decir que no cuentan con la tarjeta de movilidad fronteriza, ni el permiso especial de permanencia – PEP, lo cual lleva a indagar sobre si se aplicó el procedimiento sancionatorio en el caso de los migrantes irregulares venezolanos en el Municipio de San José de Cúcuta (Colombia) en los años 2016-2017.

---

<sup>1</sup> La migración irregular, ilegal, indocumentada, no autorizada o clandestina hace referencia a “aquellas personas que se mueven entre diversos países al margen de los sistemas de migración legal”. (Silva Gómez, 2015, p. 1).

Sanciones o medidas administrativas que se encuentran contempladas en la normativa colombiana para ser aplicadas a los migrantes irregulares.

El procedimiento sancionatorio de carácter migratorio se proyecta de acuerdo a las disposiciones legales que establece el Código de Procedimiento Administrativo en el capítulo III del procedimiento administrativo. En el inciso primero del artículo 47 establece que “Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código”. Teniendo en cuenta que no existe ley especial que regule el proceso sancionatorio migratorio, le son aplicables las disposiciones contenidas en la ley 1437 del 2011.

Así el proceso sancionatorio inicia a solicitud de parte o de oficio por parte de la entidad competente, cuando elementos preliminares permitan establecer la presunta falta contenida en la ley por parte de una persona. Llegado el caso que la autoridad administrativa establezca que hay suficientes elementos de pruebas para realizar el proceso sancionatorio se lo comunicara al interesado de manera fidedigna. La formulación de cargos se hará mediante acto administrativo al igual que la apertura de la investigación y, deberá contener mínimamente de forma clara, congruente y precisa los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes.

El acto administrativo que formule imputación de cargos al administrado deberá ser notificado personalmente y contra él no procede recurso alguno. Dentro los 15 días siguientes a la notificación el investigado podrá presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. En razón al derecho de prueba, aquellas que no sean motivadas o pertinentes serán rechazadas de plano por la administración central conforme a los principios de la función administrativa y el debido proceso.



Una vez presentado los descargos y las pruebas, inicia el periodo probatorio el cual cuenta un término no mayor a 30 días para practicarse las pruebas. En caso de ser más de tres los investigados o las pruebas deban desarrollarse en el exterior, el periodo probatorio será de 60 días. Vencido el período probatorio se dará traslado al investigado por 10 días para que presente los alegatos respectivos.

Culminada la etapa probatoria y de alegatos se inicia el plazo para tomar una decisión de fondo, de esa manera, el funcionario competente emitirá dentro de 30 días siguientes a la presentación de los alegatos la decisión, que deberá contener las exigencias del artículo 49 de la ley 1437 del 2011:

1. La individualización de la persona natural o jurídica a sancionar.
2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción.
3. Las normas infringidas con los hechos probados.
4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación.

Llegado que se demuestre más allá de toda duda razonable, la sanción será gradual, salvo lo dispuesto en leyes especiales, así la gravedad de las faltas y el rigor de las sanciones atenderán supuestos normativos. El artículo 50 de la ley 1437 del 2011, establece los lineamientos sobre la determinación de la gravedad de la falta y la maximización de la sanción, así:

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados.
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.
3. Reincidencia en la comisión de la infracción.
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos.
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes.

7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente.

8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.

Por su parte, la Resolución 714 de 2015 de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, por la cual se establecen los criterios para el cumplimiento de obligaciones migratorias y el procedimiento sancionatorio de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en su artículo 10 establece lo relacionado con la infracción migratoria:

Constituye infracción migratoria y por lo tanto da lugar a la imposición de la sanción correspondiente, incurrir en cualquiera de las conductas descritas en el Capítulo 13, del Título I del Decreto 1067 de 2015, así como las obligaciones generales contenidas en el Decreto 4062 de 2011.

Por su parte, en el artículo 2.2.1.13.1. del Decreto 1067 de 2015, se encuentran descritas las conductas que constituyen infracción migratoria y darán lugar a la imposición de sanciones económicas (modificado por el artículo 68 del Decreto 1743 de 2015):

1. No dar aviso del cambio de residencia, domicilio, empleador y/o contratante dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la ocurrencia del hecho.
2. No solicitar la autorización previa por parte del Grupo Interno de Trabajo que el Ministro de Relaciones Exteriores determine para el cambio de empleador y/o contratante dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la ocurrencia del hecho.
3. No presentarse al registro del cambio de entidad, profesión, oficio, actividad u ocupación en la visa, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de autorizado el mismo.
4. No presentarse al registro cuando tuviere la obligación de hacerlo, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al ingreso al país o a la expedición de la visa, según corresponda, o no presentar dentro del mismo término al registro a los menores.

5. Negarse reiteradamente a presentarse ante la autoridad migratoria, a pesar de haber sido requerido por escrito.
6. Incurrir en permanencia irregular.
7. No tramitar el salvoconducto correspondiente cuando se requiera.
8. No solicitar Cédula de Extranjería dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cumplimiento de la mayoría de edad.
9. No renovar Cédula de Extranjería dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su vencimiento.
10. Incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en capítulos precedentes de este Decreto por parte de los dueños, administradores, arrendatarios, tenedores y comodatarios de hoteles, pensiones, hostales, residencias, apartahoteles, fincas, casas apartamentos y demás establecimientos que presten el servicio de hospedaje.
11. Ingresar o salir del país sin el cumplimiento de los requisitos legales.
12. Ejercer profesión, ocupación u oficio distinto al autorizado.
13. Desarrollar actividades remuneradas sin estar autorizado para ello.
14. Ejercer actividad u ocupación con el salvoconducto expedido para la salida del territorio nacional.
15. Celebrar contratos comerciales con extranjeros sin el cumplimiento de los requisitos legales.
16. Facilitar la obtención de visas mediante simulación de algún tipo de contrato.
17. No dar aviso por escrito a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia del ingreso o retiro del extranjero dentro de los quince (15) días calendario siguientes, por parte de la entidad, federación, confederación, asociación, comunidad u otra entidad de carácter religioso.
18. Permitir a un extranjero iniciar estudios sin la correspondiente visa y/o no dar aviso por escrito a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, del inicio de sus estudios y de su terminación definitiva, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a esta.
19. No Informar a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, del ingreso o la terminación de la labor o actividad por parte de un ciudadano extranjero que

participe en una entidad sin ánimo de lucro, Organización No Gubernamental (ONG), misión diplomática u organismo internacional, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de ocurrido el hecho.

20. No informar por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se realizó la entrega formal de un bien inmueble, por parte de los propietarios o administradores de fincas, apartamentos, casas o inmuebles de hotelería e inmobiliarias que arrienden o presten servicio de hospedaje a extranjeros.

21. No facilitar la revisión de la documentación relacionada con la contratación, vinculación y/o admisión de personal extranjero por parte de los empleadores o contratantes.

22. Transportar extranjeros sin la documentación legal correspondiente, y/o no cumplir con la obligación de devolverlos, cuando la autoridad migratoria no autorice el ingreso.

23. No poner a disposición de las autoridades de migración a su arribo al país a la persona que ha sido deportada, expulsada o devuelta, u omitir o retardar la entrega de la documentación correspondiente.

24. No presentar la lista de pasajeros y tripulantes en la oportunidad y con la información solicitada por la autoridad migratoria.

25. No presentar a los pasajeros discapacitados, menores de edad o cualquiera otra persona a cargo de la empresa, ante las autoridades migratorias para el control migratorio.

26. Vincular, contratar, emplear, admitir o permitir desarrollar una labor, trabajo u oficio a un extranjero sin el cumplimiento de los requisitos migratorios; favorecer su permanencia irregular; o, abstenerse de comunicar la vinculación, admisión, desvinculación o terminación de labores dentro de los quince (15) días calendario siguientes.

27. Propiciar el ingreso o la salida irregular de extranjeros o nacionales del territorio nacional por parte de una empresa, compañías o agencias de cualquier naturaleza, sin perjuicio de las demás sanciones legales a que haya lugar.

28. Abstenerse de informar por escrito con antelación a cinco (5) días calendario a la realización del evento o espectáculo público, cultural o deportivo, por parte de los contratantes o empresarios, sin perjuicio de las sanciones legales a que haya lugar.

29. Abstenerse de sufragar los gastos de regreso al país de origen o al último lugar de residencia del extranjero contratado o vinculado, así como el de su familia o beneficiario si es el caso, cuando haya terminación del contrato o desvinculación, y/o cuando proceda la cancelación de la visa, la deportación o expulsión, sin perjuicio de las sanciones legales a que haya lugar.

30. No identificarse como nacional colombiano a su ingreso o salida del territorio nacional, ante la autoridad migratoria de conformidad a lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 43 de 1993 o las leyes que la sustituyan, modifiquen o deroguen.

31. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en este decreto por parte de clínicas, hospitales o centros médicos que brinden atención a extranjeros por urgencias u hospitalización.

32. Incumplimiento de las demás obligaciones contenidas en el presente Decreto y demás normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen.

En cuanto a la graduación de las sanciones, esta se da de acuerdo a la clasificación de las infracciones contenida en la Resolución 714 de 2015, las cuales pueden ser leves, moderadas, graves y gravísimas (artículo 16), las leves tienen una sanción económica de medio ( $\frac{1}{2}$ ) hasta siete (7) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes; las moderadas corresponden a una sanción económica de uno (1) hasta quince (15) Salarios Mínimos Legales Vigentes; las graves, armean la deportación; y las gravísimas, darán lugar a la expulsión del territorio nacional.

La medida administrativa de deportación, que también se encuentra contemplada en el Decreto 1067 de 2015 (Artículo 2.2.1.13.1.1.) se podrá ordenar en los siguientes casos:

1. Ingresar o salir del país sin el cumplimiento de las normas que reglamentan la materia, siempre y cuando no existan circunstancias especiales que ameriten la sanción de multa.
2. Abstenerse de cancelar la sanción económica que le haya sido impuesta por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, o cuando transcurran más de

dos meses desde la ejecución del acto sancionatorio sin que haya efectuado un abono a la obligación.

3. Encontrarse en permanencia irregular en los términos del Capítulo 11 de este Título, siempre y cuando no existan circunstancias especiales que ameriten la sanción económica.
4. Obtener visa mediante fraude o simulación, formular declaración falsa en la solicitud de visa o en desarrollo de los procedimientos administrativos adelantados por las autoridades migratorias, así como presentar documentos que induzcan a error al Ministerio de Relaciones Exteriores o a la autoridad migratoria para su ingreso, salida, legalización, control y registro.
5. Abstenerse de cambiar la visa o no solicitar la misma cuando estuviere en la obligación de hacerlo.
6. Desarrollar una actividad para la cual no esté autorizado en el correspondiente permiso de ingreso.
7. Incurrir en alguna de las causales de inadmisión o rechazo.
8. Ser objeto de quejas constantes que califiquen al extranjero como persona no grata para la convivencia social o tranquilidad pública.
9. No abandonar el país dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la notificación del auto de cancelación de la visa.
10. Mostrar renuncia al pago de obligaciones pecuniarias con cualquier persona natural o jurídica demostrando renuencia a su pago.
11. Haber sido sancionado económicamente dos o más veces dentro del mismo año calendario por parte de una misma entidad pública.

En ese sentido, el artículo 2.2.1.13.1.3. (modificado por el artículo 69 del Decreto 1743 de 2015), estableció que:

El extranjero que haya sido deportado solo podrá ingresar al territorio nacional una vez transcurrido el término de la sanción que establezca la resolución respectiva, que no debe ser inferior a seis (6) meses ni superior a diez (10) años, previa expedición de la visa otorgada por las Oficinas Consulares de la República.

Asimismo, dentro de las medidas administrativas, también se encuentra contemplada en el Decreto 1067 de 2015, la expulsión al extranjero que estando en Colombia, incurra en cualquiera de las siguientes causales (artículo 2.2.1.13.2.1.):

1. Abstenerse de dar cumplimiento a la resolución de deportación dentro del término establecido en el salvoconducto para salir del país, o regresar al país antes del término de prohibición establecido en la misma o sin la correspondiente visa.
2. Registrar informes o anotaciones en los archivos de las autoridades competentes, por propiciar el ingreso de extranjeros con falsas promesas de contrato, suministro de visa o documentos de entrada o permanencia.
3. Haber sido condenado en Colombia a pena de prisión cuya sentencia no contemple como accesoria la expulsión del territorio Nacional.
4. Estar documentado fraudulentamente como nacional colombiano o de otro país.

Finalmente, el Decreto 1067 de 2015, en su artículo 2.2.1.13.2.2., consagra otros eventos de expulsión, en el caso de que los extranjeros que se encuentren en territorio colombiano:

Realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, o la tranquilidad social o cuando se haya comunicado por autoridad extranjera al Estado colombiano, que en contra de la persona se ha dictado en ese país providencia condenatoria o una orden de captura, por delitos comunes o se encuentre registrado en los archivos de Interpol.

O cuando un ciudadano extranjero haya sido solicitado en extradición por su país de origen y manifieste su voluntad de comparecer ante las autoridades de dicha Nación.

Guerra Restrepo (2015), en su artículo sobre “Tipos de sanciones y marco jurídico que se aplica en Colombia a los extranjeros fuera de estatus jurídico”, afirma lo siguiente;

Si se analizan las sanciones, las económicas, la deportación y, por último, la expulsión, la primera es menos grave, en pocas ocasiones como la que se cita a continuación proceden consecucionalmente así: si se incumple la primera, procede la segunda, que es la deportación, y si se incumple esta, procede la expulsión, que es la más grave. (p. 179).

En cualquier caso, la sanción debe cumplir con los fines encomendados por el legislador. En materia migratoria, las sanciones se visualizan como un instrumento administrativo que mantiene el statu quo, garantizando el cumplimiento de lo establecido en la ley. Las sanciones en materia migratoria se impondrán mediante resolución motivada contra la cual proceden los recursos de la sede administrativa en el efecto suspensivo.

Finalmente, la potestad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones de esta índole es de tres años una vez ocurrido el hecho, salvo norma especial, como se adujo en materia migratoria no se configura ley especial sobre el proceso sancionatorio, por lo cual la caducidad de la acción sancionatoria es la connotada en el artículo 52 de la ley 1437 del 2011. En el término estipulado se deberá haber expedido y notificado la sanción, en caso contrario, la facultad sancionatoria se extingue.

Por otra parte, los actos administrativos que resuelven recursos deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. En caso de no ser resueltos en los tiempos establecidos, el recurso se entenderá fallado a favor del recurrente, lo que configura un silencio administrativo positivo a favor del investigado, debiendo ser protocolizado mediante escritura pública. La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco años contados a partir de la fecha de la ejecutoria y cuando se trate de un hecho o conducta continuada, el término de caducidad se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción.



En ese sentido, el procedimiento administrativo sancionatorio de carácter migratorio se constituye como una garantía a favor del investigado, pues implica una cantidad considerable de elementos que permite racionalizar la acción sancionatoria del Estado a prerrogativas adecuadas en pleno siglo XXI. Como lo sostiene Suay (1999):

Como es evidente, el procedimiento administrativo no cumple sólo una función de garantía para los particulares. También, desde la propia perspectiva de los intereses públicos, por los que la Administración ha de velar, puede perfectamente explicarse la existencia de la institución que nos ocupa.

(...)

En el procedimiento administrativo sancionador (seguramente el más gravoso de todos, junto con el expropiatorio y el tributario), más que en ningún otro, las garantías pasan a situarse en primer plano.

En síntesis, el proceso administrativo sancionatorio de carácter administrativo se caracteriza por ser un proceso expedito, pues los plazos consagrados en la legislación permiten resolver en plazos razonables y conforme a los principios de la eficacia y la eficiencia las investigaciones sobre una presunta falta a la ley migratoria. También se constituye en un proceso garantista que establece prerrogativas a favor del administrado y que desarrolla el proceso de acuerdo a los postulados del artículo 29 de la Constitución Política. Así mismo, el procedimiento sancionatorio gradúa las sanciones y las faltas de acuerdo a determinados elementos que el legislador proveyó para los administrados responsables. En consecuencia, el procedimiento sancionatorio administrativo se surte a través de actos administrativos motivados y en algunos casos recusables ante otra instancia, a fin de asegurar los derechos del administrado.

Es importante resaltar lo señalado por Krüger Sarmiento (2018), respecto de los migrantes venezolanos, quien afirma que:

En Colombia el ingreso y permanencia irregular de un migrante no constituye delito alguno, en consecuencia no debe calificarse de ilegal. Cuando un extranjero se encuentra incurso en causal de la normatividad migratoria vigente se considera irregular. La situación de irregularidad genera una actuación administrativa, cuya consecuencia sancionatoria puede ser, en el caso de los venezolanos, la cancelación de la TMF o la imposición de una multa e incluso la deportación. (En: El Nacional, p. 1).

Sanciones o medidas administrativas que ha aplicado Migración Colombia en el Municipio de San José de Cúcuta con respecto a los migrantes irregulares en los años 2016-2017.

En el inicio de operaciones de Migración Colombia en el año 2012, la frontera colombiana con Venezuela, contaba con cuatro puestos de control migratorio, los cuales fueron ampliados, existiendo actualmente siete puestos ubicados en los departamentos de Guanía, Vichada, Arauca, Norte de Santander y La Guajira.

Por otra parte, una vez habilitados por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, los pasos peatonales de Pedro María Ureña y San Antonio del Táchira (Venezuela) con Colombia, en un horario de cinco (5) de la mañana a ocho (8) de la noche, entró también en funcionamiento la Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo (Resolución 1220 de 2016)<sup>2</sup>, con el fin de garantizar una migración ordenada y segura, y la cual permite

---

<sup>2</sup> “La puesta en marcha de la Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo nos permitió, como autoridad migratoria, identificar la población que habitualmente se mueve por zona de frontera. Una población que anteriormente entraba y salía del país sin hacer ningún tipo de control migratorio. Así mismo, pudimos evidenciar que cerca del 98% de los venezolanos que ingresaban empujando esta Tarjeta de Movilidad Fronteriza abandonaban el territorio nacional luego de adquirir, principalmente, alimentos y productos de primera necesidad. El 2% restante, ingresaba al interior del país, utilizando su pasaporte, bien sea para quedarse en Colombia o bien, para continuar hacia un tercer país”, afirmó el Director General de Migración Colombia; Christian Krüger Sarmiento. (Migración Colombia, 2017, p. 6).

registrar los ingresos y salidas de los venezolanos que a diario cruzan la frontera e ingresan a Colombia.

A la Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo, se suma el Permiso Especial de Permanencia (PEP) establecido en la Resolución 5797 del 25 de julio de 2017 (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia) el cual de acuerdo al artículo 1 se otorgará únicamente a los nacionales venezolanos que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Encontrarse en el territorio colombiano a la fecha de publicación de la presente resolución.
2. Haber ingresado al territorio nacional por Puesto de Control Migratorio habilitado con pasaporte.
3. No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.
4. No tener una medida de expulsión o deportación vigente

Para que una persona migrante venezolana ingrese de manera regular a Colombia debe presentar su visa (trabajo o estudio), o su pasaporte venezolano válido y vigente (turistas), cédula de extranjería, tarjeta de movilidad fronteriza (tránsito fronterizo) la cual se expidió hasta antes del 8 de febrero, permiso especial de permanencia (trabajo o estudio) para su expedición debe contar con pasaporte, en el caso de los dos últimos estos tendrán una validez por dos años, y a la fecha se encuentra suspendida su expedición.

Según las cifras de Migración Colombia, “del 1 de enero al 13 de agosto de 2016, se registró el ingreso de cerca de 137 mil ciudadanos venezolanos al territorio nacional, y durante el primer mes de reapertura de frontera se dio un promedio de ingreso diario de cerca de 50 mil ciudadanos venezolanos. Al final del año 2016, 378.965 ciudadanos venezolanos habían ingresado a Colombia”. (2017, p. 5-8).

En lo que concierne al año 2017, Migración Colombia registró el ingreso a territorio nacional con corte a 30 de junio de 2017, de:

263.331 ciudadanos venezolanos, los cuales ingresaron, principalmente, por los Puestos de Control Migratorio ubicados en Cúcuta, Paraguachón y Bogotá. En el caso de los 263.331 ciudadanos venezolanos que habían ingresado durante los primeros seis (6) meses de este año a Colombia, al 30 de junio ya habían salido del territorio nacional 228.380. (Migración Colombia, 2017, p. 7).

Al finalizar el año 2017, Migración Colombia, informó que:

En el año 2017 ingresaron a Colombia, unas 796.000 personas venezolanas en el año 2017, y tan solo se registran a 31 de diciembre de 2017, 632.673 ciudadanos venezolanos, usuarios de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, estimándose que cerca de 140 mil ciudadanos venezolanos habrían ingresado de forma irregular”. (Migración Colombia, 2017, p. 7).

Asimismo, de acuerdo a un informe de Migración Colombia (2017), dentro del territorio nacional permanecen, en la actualidad, un poco más de 153 mil ciudadanos venezolanos, a quienes ya se les venció su permiso temporal de permanencia, así como cerca de 50 mil más, a quienes estaría próximos a vencerseles y estarían en permanencia irregular. (p. 7).

Cuadro 1. Entrada y Salida de Venezolanos a Colombia

AÑO	ENTRADAS	SALIDAS
2016	378.965	311.252
2017	796.000	632.673

Fuente: Migración Colombia, 2016.

Esta entrada de venezolanos a Colombia obedece a los registros que efectúa a diario Migración Colombia, a través de sus Puestos de Control Migratorio (PCM) ubicados en la frontera (Puesto migratorio de Cúcuta, Paraguachón, Arauca y Puerto Santander; Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta; y Puestos fluviales de Puerto Carreño y Puerto Inírida)

Respecto a las sanciones o medidas administrativas a los ciudadanos extranjeros en orden a la gravedad de la infracción son: 1. Inadmisión, 2. Deportación, 3. Expulsión; y 4. Multas, que pueden oscilar entre medio y siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).

En desarrollo de los procedimientos sancionatorios, Migración Colombia ha aplicado las medidas de sanciones económicas, deportaciones y expulsiones de acuerdo a lo establecido en el decreto 1067 de 2015.

Cuadro 2. Medidas administrativas de deportación, expulsión y sanciones económicas

AÑO	DEPORTACION	EXPULSION	ECONÓMICAS	TOTAL
2016	1.956	203	3.473	5.632
2017	1.225	140	3.961	4.326

Fuente: Subdirección de Verificación Migratoria – Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

De acuerdo las cifras de la Regional Oriente de Migración Colombia (departamentos de Santander y Norte de Santander), las actuaciones administrativas en el período 2016-2017, se resumen en las siguientes:

Cuadro 3. Medidas administrativas de deportación, expulsión y sanciones económicas

AÑO	DEPORTACION	EXPULSION	ECONÓMICAS
2016	1042	184	706
2017	97	46	520

Fuente: Subdirección de Verificación Migratoria – Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

Uno de los mayores casos de aplicación de las medidas administrativas de deportación, expulsión y sanciones económicas, se dio por parte del Grupo Especial

Migratorio (GEM)<sup>3</sup> en el año 2018 en el Polideportivo del Barrio Sevilla en el cual habitaban 599 ciudadanos migrantes irregulares venezolanos (387 hombres, 139 mujeres y 89 menores de edad), la cuales pernotaban en carpas.

Asimismo, se adelantan operativos en toda la ciudad a fin de identificar migrantes venezolanos irregulares, quienes son llevados hasta el Puente Internacional Simón Bolívar y son devueltos a Venezuela por no contar con los documentos requeridos para estar en territorio colombiano.

Por otra parte, finalizado el proceso de Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia - RAMV, mediante el cual se efectuó una caracterización sociodemográfica de la población venezolana que se encuentra en Colombia, se determinó que “en todo el país se encuentran 442.462 venezolanos de manera irregular en los últimos 16 meses 819.034 venezolanos se encuentran en Colombia, de los cuales 376.572 tienen condición de regulares y 442.462 son irregulares”. (Muñoz, 2018, p. 1).

Dificultades que ha tenido la autoridad migratoria en el Municipio de San José de Cúcuta para aplicar las sanciones o medidas administrativas en el caso de los migrantes irregulares en los años 2016-2017.

El principal problema que se presenta en cuanto a los migrantes venezolanos, es que algunos incumplen con el lleno de los requisitos exigidos para ingresar o permanecer en Colombia, lo cual los convierte en migrantes irregulares, y es precisamente bajo esta condición que pueden ser objeto de la aplicación de una sanción o medida administrativa por parte de la autoridad migratoria, toda vez que existen unos requisitos consagrados en la normatividad colombiana, que deben cumplir los migrantes que deseen ingresar a Colombia, de acuerdo a

---

<sup>3</sup> Integrado por funcionarios de la Policía, Migración Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y Dian.

la actividad que vayan realizar (estudio, turismo, trabajo) para que sean admitidos como migrantes regulares.

Las dificultades que ha tenido la autoridad migratoria en el Municipio de San José de Cúcuta para aplicar las sanciones o medidas administrativas en el caso de los migrantes irregulares en los años 2016-2017, se resumen en el Informe “Necesidades de protección de las personas venezolanas forzadas a migrar, refugiadas y en riesgo de apátrida en Colombia”, publicado por Codhes en el año 2018, así:

En Colombia no existe una ley migratoria que reúna los derechos, deberes y procedimientos en los cuales se pueden ver inmersos los extranjeros. La materia se ha regulado por vía de decretos reglamentarios – vulnerando la reserva de ley que existe sobre la materia-, los cuales conceden amplias potestades discrecionales a las autoridades de migración y establecen procedimientos de deportación y expulsión con base en una serie de causales ambiguas en aplicación, de las cuales se desconocen los principios del debido proceso, el principio de no devolución y la presunción de inocencia, entre otros. (p. 21).

La autoridad migratoria en Colombia, tiene problemas para aplicar las sanciones o medidas administrativas en el caso de los migrantes irregulares, por lo ambiguo de las causales establecidas en especial en cuanto a la deportación y expulsión.

A lo anterior, se suma que posterior a la imposición de las sanciones a los extranjeros que incumplen sus obligaciones, el procedimiento administrativo contenido en la Ley 1437 de 2011, debido a sus múltiples etapas y términos, dilata en el tiempo las decisiones respecto de los extranjeros que permanecen de forma irregular en territorio colombiano.

Por su parte, Arciniégas Suárez (2014), al plantearse como pregunta de investigación ¿Cuáles son los inconvenientes que se presentan con el desarrollo y aplicación del procedimiento administrativo general de la Ley 1437 de 2011, en materia de migración de extranjeros y el cumplimiento de sus obligaciones en el país?, precisa lo siguiente:

Es evidente que el procedimiento administrativo aplicable por el incumplimiento de obligaciones migratorias, coadyuva en la estadía de los extranjeros en el país por largos periodos en condiciones irregulares, e incluso, con las implicaciones sociales y de orden económico para las instituciones públicas intervinientes, pues es claro que en desarrollo del actual procedimiento administrativo al extranjero motivo de investigación, no le es aplicable ninguna de las sanciones o medidas administrativas existentes hasta tanto no se diligencie el procedimiento administrativo sancionatorio y de carácter general establecido en la Ley 1437 de 2011. (pp. 12-13).

De acuerdo a información entregada por el Grupo de Verificaciones Migratorias Regional Oriente (2018), en cuanto a las dificultades que ha tenido la autoridad migratoria en el Municipio de San José de Cúcuta para aplicar las sanciones o medidas administrativas en el caso de los migrantes irregulares en los años 2016-2017, estas “son las propias en el desarrollo de los procedimientos sancionatorios dado el volumen de migrantes investigados, sobre las cuales no es posible dar mayor información dado la reserva de la información contenida en el Decreto 4062 de 2011”.



## CONCLUSIONES

El procedimiento sancionatorio aplicable a los migrantes en Colombia, se encuentra contenido en la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Decreto 1067 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores, y la Resolución 714 de 2015, en la que se establecen los criterios para el cumplimiento de obligaciones migratorias y el procedimiento sancionatorio de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

En cuanto a las sanciones o medidas administrativas que son aplicadas a los migrantes irregulares en Colombia, estas son aplicadas a quien infrinja las obligaciones migratorias que se encuentran contempladas en la Resolución 714 de 2015; por su parte las conductas que constituyen infracción migratoria y por lo tanto dan lugar a la imposición de la sanción correspondiente, está descritas en el Capítulo 13, del Título I del Decreto 1067 de 2015 (modificado por el artículo 68 del Decreto 1743 de 2015), así como las obligaciones generales contenidas en el Decreto 4062 de 2011. Respecto a las sanciones o medidas administrativas a los ciudadanos extranjeros en orden a la gravedad de la infracción son: 1. Inadmisión, 2. Deportación, 3. Expulsión; y 4. Multas.

Las sanciones o medidas administrativas que ha aplicado Migración Colombia en el Municipio de San José de Cúcuta con respecto a los migrantes irregulares en los años 2016-2017, comprenden especialmente sanciones económicas, deportaciones y expulsiones de acuerdo a lo establecido en el decreto 1067 de 2015; así por ejemplo, en el año 2016 por parte de la Regional Oriente de atendieron 1042 deportaciones, 184 expulsiones, y 706 sanciones económicas; y en relación al año 2017, se dio trámite a 97 deportaciones, 46 expulsiones, y 520 sanciones económicas, la disminución de las cifras responde a la implementación de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, al Permiso Especial de Permanencia, y la cedulación de venezolanos hijos colombianos que han optado por adelantar este trámite, para no estar de manera irregular en territorio colombiano.

El principal problema que se presenta en cuanto a los migrantes venezolanos, es que algunos incumplen con el lleno de los requisitos exigidos para ingresar o permanecer en Colombia, lo cual los convierte en migrantes irregulares, y es precisamente bajo esta condición que pueden ser objeto de la aplicación de una sanción o medida administrativa por parte de la autoridad migratoria.

Frente a las dificultades que ha tenido la autoridad migratoria en el Municipio de San José de Cúcuta para aplicar las sanciones o medidas administrativas en el caso de los migrantes irregulares en los años 2016-2017, estas son las propias en el desarrollo de los procedimientos sancionatorios dado el volumen de migrantes investigados; sin embargo, se resalta que la autoridad migratoria en Colombia, tiene problemas para aplicar las sanciones o medidas administrativas en el caso de los migrantes irregulares, por lo ambiguo de las causales establecidas en especial en cuanto a la deportación y expulsión. A lo anterior, se suma que posterior a la imposición de las sanciones a los extranjeros que incumplen sus obligaciones, el procedimiento administrativo contenido en la Ley 1437 de 2011, debido a sus múltiples etapas y términos, dilata en el tiempo las decisiones respecto de los extranjeros que permanecen de forma irregular en territorio colombiano.

Respecto a la aplicabilidad que se dio al procedimiento sancionatorio en el caso de los migrantes irregulares venezolanos en el Municipio de San José de Cúcuta (Colombia) en los años 2016-2017, las cifras reseñadas anteriormente demuestran que si se está dando aplicación al mismo, mediante las medidas de inadmisión, deportación, expulsión y sanciones económicas. Asimismo, se adelantan operativos en toda la ciudad a fin de identificar migrantes venezolanos irregulares, quienes son llevados hasta el Puente Internacional Simón Bolívar y son devueltos a Venezuela por no contar con los documentos requeridos para estar en territorio colombiano.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arciniegas Suárez, C. A. (2014). El procedimiento administrativo para asuntos de migración según el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Universidad Nueva Granada. [Bogotá](#), D.C.
- Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Colombia de 1991. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991.
- Colombia. Congreso de la República. (1993). Ley 43 (febrero 01). Por medio de la cual se establecen las normas relativas a la adquisición, renuncia, pérdida y recuperación de la nacionalidad colombiana; se desarrolla el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C. Diario Oficial No. 40.735, de 1 de febrero de 1993. Obtenido de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_0043\\_1993.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0043_1993.html)
- Colombia. Congreso de la República. (2011). Ley 1437 (enero 18). Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Bogotá, D.C. Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011. Obtenido de: [http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley\\_1437\\_2011.html](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html)
- Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento forzado CODHES, Et. al., (2018). Necesidades de protección de las personas venezolanas forzadas a migrar, refugiadas y en riesgo de apátrida en Colombia. Informe país como aporte a la audiencia temática 168 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en República Dominicana. Bogotá, D.C. Obtenido de: <http://www.refworld.org.es/pdfid/5b50d8494.pdf>
- Grupo de Verificaciones Migratorias Regional Oriente. (2018). Oficio Radicado No. 20187090332171 dirigido al Señor Jhon Alvaro Galavis Rodríguez en respuesta a su derecho de petición de información. Cúcuta, N.S.
- Guerra Restrepo, D. (2015). Tipos de sanciones y marco jurídico que se aplica en Colombia a los extranjeros fuera de estatus jurídico. Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, España.
- Krüger Sarmiento, C. (2018). “Para Colombia el migrante venezolano es mucho más que una simple cifra”. En: El Nacional. Obtenido de: [http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/para-colombia-migrante-venezolano-mucho-mas-que-una-simple-cifra\\_225407](http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/para-colombia-migrante-venezolano-mucho-mas-que-una-simple-cifra_225407)
- Migración Colombia – Ministerio de Relaciones Exteriores. (2017). Radiografía migratoria Colombia - Venezuela 2017. Obtenido de: <http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/multimedia/6308-radiografia-de-venezolanos-en-colombia-31-12-2017>

- Migración Colombia – Dane. (2016). Boletín Anual de Estadísticas. Enero – Diciembre de 2016. Obtenido de:  
<http://migracioncolombia.gov.co/phocadownload/Bolet%C3%ADn%20Estad%C3%ADstico%202016%20Espa%C3%B1ol.pdf>
- Ministerio de Relaciones Exteriores. (2015). Decreto 1067 (mayo 26). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores. Bogotá, D.C. Diario Oficial No. 49.523 de 26 de mayo de 2015. Obtenido de:  
[https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto\\_1067\\_2015.htm](https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1067_2015.htm)
- Ministerio de Relaciones Exteriores. (2017). Decreto 1743 (agosto 31). Por medio del cual se modifican parcialmente las disposiciones generales de las Oficinas Consulares Honorarias, Pasaportes, Visas, de la Protección y Promoción de Nacionales en el exterior, del Retorno, del Fondo Especial para las Migraciones, de la Tarjeta de Registro Consular y disposiciones de Extranjería, Control y Verificación Migratoria, de que tratan los Capítulos III al XI, y 13, del Título I de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1067 de 2015. Bogotá, D.C. Diario Oficial No. 49.621 de 31 de agosto de 2015. Obtenido de:  
[https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto\\_1743\\_2015.htm](https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1743_2015.htm)
- Ministerio de Relaciones Exteriores. (2017). Resolución 5797 (julio 25). Por medio de la cual se crea un Permiso Especial de Permanencia. Bogotá, D.C. Diario Oficial No. 50307 del 27 de julio de 2017. Obtenido de:  
[https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion\\_minr\\_elaciones\\_5707\\_2008.htm](https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minr_elaciones_5707_2008.htm)
- Muñoz, F. (2018). 442.462 Venezolanos identificados en el registro RAMV recibirán regularización temporal. Bogotá, D.C. Obtenido de:  
<http://es.presidencia.gov.co/noticia/180613-442462-venezolanos-identificados-en-registro-RAMV-recibiran-regularizacion-temporal>
- Presidencia de la República. Departamento Administrativo de la Función Pública. (2011). Decreto 4062 (octubre 31). Por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, se establece su objetivo y estructura. Bogotá, D.C. Diario Oficial No. 48.239 de 31 de octubre de 2011. Obtenido de:  
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=70183>
- Silva Gómez, O. E. (2015). Migración irregular. Aproximación: doctrina internacional y jurisprudencia penal colombiana a partir de la Constitución de 1991. Conflicto & Sociedad Vol. 3, N°1, enero - junio de 2015, pp. 127-143 - ISSN 2322-6900 - UNISABANETA – Sabaneta.

Suay, J. (1999). La discutible vigencia de los principios de imparcialidad y de contradicción en el procedimiento administrativo sancionador. *Revista de Administración Pública* Núm. 123. Septiembre-diciembre 1990.

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. (2015). Resolución 714 (junio 12). Por la cual se establecen los criterios para el cumplimiento de obligaciones migratorias y el procedimiento sancionatorio de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Bogotá, D.C. Diario Oficial No. 49.554 de 25 de junio de 2015. Obtenido de:  
[https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion\\_uaem\\_c\\_0714\\_2015.htm](https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_uaem_c_0714_2015.htm)

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. (2016). Resolución 1220 (agosto 12). Por la cual se establecen los Permisos de Ingreso y Permanencia, Permisos Temporales de Permanencia, y se reglamenta el Tránsito Fronterizo en el territorio nacional. Bogotá, D.C. Diario Oficial No. 49.963 de 12 de agosto de 2016. Obtenido de:  
[https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion\\_uaem\\_c\\_1220\\_2016.htm](https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_uaem_c_1220_2016.htm)

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. (2017). Oficio Radicado No. 20172000423331 dirigido al Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Bogotá, D.C.